

Pedro López Díaz
**Contribución a la crítica
de las relaciones
políticas en México**

Se comprende inmediatamente en un país como Francia donde el poder ejecutivo dispone de un ejército de funcionarios de más de medio millón de individuos y tiene por lo tanto constantemente bajo su dependencia más incondicionada a una masa inmensa de intereses y existencias, donde el Estado tiene atada y fiscalizada, regulada, vigilada y tutelada a la sociedad civil, desde sus manifestaciones más amplias de vida hasta sus vibraciones más significantes, desde las modalidades más generales de subsistencia hasta la existencia privada de los individuos.

Karl Marx, *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*

La estructura actual de la sociedad mexicana constituye el producto de la forma específica en que se desarrolló el capitalismo en el periodo posrevolucionario. Así, la estructura industrial alcanzada el dispar deterioro de las relaciones de producción en el campo, la magnitud alcanzada de la infraestructura de servicios necesaria al desarrollo del conjunto del sistema, constituyeron procesos que conformaron un periodo de transición hacia una sociedad donde la categoría social del proletariado, como núcleo fundamental de las clases explotadas por el capital, pasó a constituir la clase más importante de la sociedad mexicana; la predominancia del trabajo asalariado en los centros urbanos se ha hecho indiscutible, y su acelerada irrupción en el campo incuestionable.

Este proceso, esta fase histórica de la sociedad mexicana, fundamentalmente a partir del término de la segunda guerra mundial, se dio en un contexto internacional del capitalismo que se caracterizó por la vigencia de uno de los ciclos económicos más prolongados y de mayor estabilidad de la fase imperialista, durante el cual, Estados Unidos impuso su hegemonía al conjunto del sistema. La reconversión de la economía capitalista en Europa occidental y Japón sobre la base de un nuevo

horizonte tecnológico, el desarrollo de un nuevo esquema de la división internacional del trabajo a partir de la expansión y consolidación de las empresas transnacionales, constituyeron elementos fundamentales en la recomposición de la estructura social de los países capitalistas avanzados, operándose cambios fundamentales en la propia estructura de sus clases obreras; como consecuencia, surgieron nuevas exigencias en la elaboración de la política revolucionaria de sus vanguardias. Durante este periodo no faltaron cambios importantes en el conjunto de las relaciones políticas internacionales; el movimiento de liberación nacional de los países africanos y asiáticos rompió la vieja estructura colonial de los países imperialistas y un conjunto de países se abrieron paso al periodo de transición al socialismo a través de revoluciones anticapitalistas.

En nuestro país el proceso de integración y diferenciación social determinado por el desarrollo del capitalismo, no ha cancelado la subsistencia y reproducción de sectores sociales cuya subordinación a las relaciones de producción capitalista dista mucho de ser estructural. Ello se traduce en la existencia de amplios sectores urbanos cuya marginalidad los convierte en categorías sociales de carácter periférico, situación que pone de manifiesto la incapacidad del capitalismo, a pesar de su incuestionable desarrollo, para satisfacer ingentes demandas sociales de bienestar. A ello hay que agregar la existencia y reproducción de vastos sectores sociales en el campo, que se mantienen en el espacio de la producción mercantil simple de subsistencia y que la dinámica de la acumulación capitalista mantiene como reserva permanente de su potencial ampliación.

El grado alcanzado por la industrialización, su tendencia acelerada a la concentración y centralización, ha generado en el presente un proceso estable de reproducción del proletariado industrial. El correspondiente desarrollo de toda una infraestructura social y económica, ha fortalecido y desarrollado un amplio sector de asalariados que objetivamente han pasado a integrar el espectro potencial de una amplia fuerza social alternativa al actual sistema, bajo la dirección del proletariado industrial.

En la misma dirección se ha dado un proceso de consolidación de la clase dominante. La clase empresarial ha encontrado condiciones óptimas para construir un poder económico altamente centralizado. La estrecha articulación del sector monopolístico industrial y un sector bancario de concentración, ha generado una oligarquía financiera que constituye ya el núcleo fundamental de la clase dominante. Esta tendencia no niega la existencia de una estructura diferenciada de la clase dominante. El pequeño y mediano capitalista ha sido marginado a las áreas aún no integradas monopolícamente o, en su caso, se ha convertido en *satélite del gran conglomerado industrial*: tanto

privado como estatal.

LA RECOMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Los cambios que se están dando en la composición social del país han encontrado un contorno más preciso durante y como resultado de la crisis económica, social y política por la que atraviesa el capitalismo en México. El aletargamiento a que habían sido constreñidos los amplios sectores de asalariados en el pasado, está rebasándose de maneras importante y las acciones de masas comienzan a ser la expresión fundamental de dichos sectores.

El desarrollo transformador y modernizante de la estructura técnica de la producción industrial comandada tanto por el capital privado como por el estatal, no sólo ha propiciado el crecimiento de la clase obrera, sino que tiende a readecuar toda una infraestructura necesaria a la reproducción ampliada del capital, lo cual ha generado una evidente recomposición de la sociedad. Este cambio ha implicado un proceso acumulativo de la experiencia de lucha de los sectores asalariados al crearse alianzas sindicales al margen del control del Estado y que han adquirido un mayor peso en la estructura global de la clase obrera sindicalizada que, en su conjunto, se encuentra sumamente dispersa en su base.

La consolidación de amplios sectores industriales y el acelerado crecimiento de los nuevos ha sido la base de un proceso reproductivo de la clase obrera en los principales centros urbanos que tiene ya varias generaciones. Ello ha confluído en una estructura más compleja del proletariado industrial y éste, a la vez, se ha convertido en un portador potencial de cambios democratizadores en el aún estrecho campo de la sociedad civil. En su seno, han aparecido con fuerza creciente demandas para transformar las leyes laborales, por el fortalecimiento de nuevas instancias de coordinación, por el fortalecimiento y desarrollo de los sindicatos nacionales de industria, como paso necesario e inmediato en su proceso de consolidación como *clase nacional*.

La desconsolidación del proletariado industrial que se dio en el pasado, con la incorporación de amplios sectores campesinos en su seno, ha sido superada a partir de la dinámica adquirida en el pasado inmediato por la acumulación capitalista en el sector industrial y el proceso que la acompañó de propia reproducción ampliada de la clase como tal. Los cambios operados en la base técnica del capital incidieron en la exigencia y determinación de un proceso acelerado de calificación y especialización de amplios sectores de asalariados, elevándose así su grado de escolaridad y ampliándose su horizonte cultural.

La ampliación e la clase obrera y su inserción en el contexto de una crisis de las relaciones políticas del país constituye el contexto de la gestación de un movimiento sindical independiente que irrumpe en la vida político-social de la nación, alterando y cuestionando parcialmente los mecanismos de control que tradicionalmente había ejercido la burocracia sindical, sobre la base de una política general de independencia frente al Estado y el surgimiento de impulsos de democratización en la base misma del sindicalismo oficial.

Los profundos efectos marginalizantes de amplios sectores sociales, especialmente en los grandes centros urbanos, han sido producidos, fundamentalmente, por la estructura monopólica a que ha arribado el desarrollo del capital social nacional asociado a la inversión externa. En ello reside la importancia que en los últimos tiempos han adquirido los movimientos de colonos, cuya lucha en torno al asentamiento físico se ha enriquecido con demandas de bienestar social y, e no pocos casos, se ha elevado al plano político en torno a reivindicaciones de gestión popular y democrática. La extensión del conflicto social, su profundidad en determinados sectores, apuntan a una sociedad civil en crecimiento, que encuentra en los mecanismos estatales de control uno de sus principales obstáculos. La posibilidad de superarlos radica en la conformación de una dirección política capaz de recuperar la independencia de las diversas organizaciones y movimientos sindicales, políticos, culturales y sociales de todo tipo de los sectores asalariados frente al Estado mexicano. Romper la *alianza histórica de clases conformada en torno a la alta burocracia política al frente del aparato estatal*, y construir a partir de la práctica revolucionaria del proletariado un nuevo sistema de alianzas que aglutine, en base a sus propios impulsos, al conjunto de los sectores sociales subordinados a la explotación del capital, se convierte en la tarea política más importante de la actual etapa del desarrollo de la revolución socialista en nuestro país.

EL ESTADO MEXICANO

EL Estado mexicano actual constituye el producto histórico tanto de la forma específica que revistió el desarrollo del capitalismo como de las maneras particulares en que se dieron y desarrollaron las relaciones políticas entre las clases y sectores de clase de la formación social mexicana, a partir del reordenamiento generado por la Revolución Mexicana. Su peculiaridad radica en haber constituido una de las fuerzas motrices que han dado sentido a la organización social, económica y política a nuestra sociedad: Estado impulsor y organizador de las clases sociales. Todo ello, indudablemente, a

través de periódicos conflictos y enfrentamientos de clase que fueron resueltos a través de una combinación de fuerza material directa y consenso social. Esta injerencia del poder estatal en la práctica de las clases en el espacio de la sociedad civil, ha conducido a una parcial dependencia orgánica –institucional e ideológica- de los sectores más organizados de las clases subalternas y de un sector de la clase dominante, lo que ha bloqueado la cabal transformación cualitativa de los obreros en clase nacional, a pesar de la existencia de las condiciones objetivas para ello.

Ha sido precisamente el espacio estatal el marco fundamental donde las clases sociales han establecido sus relaciones políticas fundamentales. El establecimiento de alianzas entre las distintas clases explotadas por el capital y los enfrentamientos entre éstas y el poder del capital, han sido sustraídos del marco de la sociedad civil para ser administrados por la clase política sobre la base y en el ejercicio del poder del Estado. Esta *subordinación orgánica* de las clases al *poder estatal* se ha traducido en una *sociedad civil sumamente estatizada* que se manifiesta a través de diversas prácticas; desde el abierto control de los partidos tradicionales, pasando por la intervención directa en la conformación y desarrollo de un poderoso aparato escolar, hasta la intervención más sutil en las propias organizaciones empresariales. Esta estatización de la sociedad civil ha conformado históricamente en *Estado Ampliado* que ha dificultado enormemente la organización política independiente no sólo del conjunto de las clases explotadas, sino aun de las propias fracciones de la clase dominante.

POLÍTICA Y ECONOMÍA DEL ESTADO AMPLIADO

Uno de los factores que ha impulsado y consolidado esta forma del *Estado Ampliado* a expensas de la sociedad civil, ha sido el desarrollo de su intervención en el campo de la producción material, convirtiéndose así en importante *capitalista colectivo* de la sociedad mexicana. Esta intervención directa ha conducido al fortalecimiento de su *función de intermediación* entre las distintas clases sociales. Frente a un sector importante de la clase obrera, al menos la más organizada sindicalmente, ha dado cobertura de negociación y acuerdo a la burocracia sindical, fortaleciendo su legitimidad frente a su base y logrando, a través de ello y como contrapartida, un amplio consenso social. Al mismo tiempo, como propietario de sectores claves en el proceso de acumulación capitalista, ha podido, por medio de diversos mecanismos, *socializar una parte de los costos de operación del capital-privado*, fortaleciendo sus márgenes de ganancia. Esta práctica en el campo de la política económica

que se sintetiza en un permanente subsidio de la economía del capital-privado, convirtió al Estado en un interlocutor válido frente al conjunto de la clase dominante e incidir así, en determinadas coyunturas, en la propia política empresarial de los principales conglomerados monopolísticos, sin que ello cancelara un sinnúmero de enfrentamientos parciales, durante las fases de renegociación de las posiciones correspondientes a las distintas fracciones de la clase empresarial o que implicaron reajustes de éstas dentro del *bloque de dominación*, en las diversas etapas por las que ha atravesado el desarrollo del capitalismo en nuestro país.

Ésta ha sido la *base real* de la capacidad de intermediación y representación de la *alta burocracia política* al frente del aparato de Estado. Ligada al mando económico del sector estatal de la producción social y aliada a la cúpula sindical, ha sintetizado su liderazgo político más allá de la eventualidad coyuntural. Esta práctica del liderazgo político de la nación obliga a la necesidad de conceptualizar con mayor precisión a la capa social que lo ha ejercido más allá del estricto marco del aparato estatal. Así, la intermediación del partido del poder o, mejor dicho, la extensión del Estado en el marco de la sociedad civil, da cuenta de un estable y consolidado sector de *dirección política* que suelta en un liderazgo tanto a la representación de bases sociales organizadas en torno a intereses de clase y aglutinadas dentro del partido de Estado, como a la representación burguesa, delegada en la acción de la alta burocracia política. Este proceso y esta peculiar práctica política y social, han conformado con el transcurrir del tiempo una *clase política* con una clara vocación de poder y, al mismo tiempo, *entrecruzada por los intereses antagónicos de las clases sociales*.

No obstante, la crisis política pone de manifiesto estas contradicciones en el seno mismo del aparato de mando de la nación. *La ampliación histórica del Estado mexicano* se ha dado en un contexto de maduración cuantitativa de las clases explotadas y de consolidación y diferenciación de la clase dominante, y ello traslada el conflicto mismo de las clases al seno del Estado Ampliado. Lo que fue una virtud y una eficiencia en el ejercicio del poder, se ha convertido ahora en un permanente espacio de conflicto político; se da, pues, una crisis de gobernabilidad, que podrá encontrar múltiples cauces alternativos o simultáneos: desde la renegociación del pacto burgués en el seno del bloque de dominación, hasta la conformación de una *alternativa de régimen político*, sobre la base del establecimiento de una *nueva alianza histórica* de las clases subalternas bajo la dirección del proletariado industrial.

ESTADO Y BLOQUE DE DOMINACIÓN

El *bloque de poder*, como la forma específica de articulación de las distintas fracciones de la clase dominante y la dirección económica, y su *expresión* en el aparato de Estado ha tenido la peculiaridad en nuestro país de no expresarse directamente en el seno del mismo, como tal, sino que se ha *subordinado a una alianza de clase, históricamente conformada* durante el periodo posrevolucionario, que ha tenido como eje de articulación al alto mando de la burocracia política al frente del aparato estatal. Han conformado esta alianza de clase importantes sectores obreros aglutinados en torno del aparato sindical oficial, una parte de los sectores campesinos ampliamente tutelados por las organizaciones oficiales, diferentes sectores de las clases medias y un sector de origen nacionalista de la clase dominante.

El desarrollo del capitalismo, su forma concentrada de crecimiento, la conformación de un reducido sector que centraliza una parte importante del ingreso nacional, el crecimiento y la diferenciación misma de las clases sociales, ha debilitado con el transcurrir del tiempo la base de este *sistema de alianzas* que ha dado sustentación y legitimidad al Estado mexicano y al régimen político derivado de éste. En realidad, esta alianza histórica de clases, a partir de la cual se ha vertebrado el poder político burgués, se ha sustentado básicamente sobre tres factores:

Primero: La extensión del poder estatal a través de la mediación del partido oficial y las organizaciones que lo integran.

Segundo: La fuerza adquirida por el Estado en el campo de la producción material, situación que le ha permitido fungir como interlocutor benefactor de la clase dominante en su conjunto.

Tercero: A partir de los dos elementos anteriores, el papel que ha revestido el alto mando de la burocracia política en el ejercicio continuado del poder, *no simplemente como personal político de la clase dominante*, sino representando al mismo tiempo los intereses inmediatos y mediatos del conjunto de las clases dominadas por el capital.

Sin embargo, al mismo tiempo que se debilita esta alianza, se ha fortalecido considerablemente el bloque de dominación burgués en su base económica, que tiende a articularse, cada vez con mayor organicidad, con el poder estatal a través de una burocracia política cada vez más diferenciada en su estructura, cada vez más ambivalente en su discurso ideológico, cada vez más incapaz de mantener la dualidad de su representación, cada vez más fracturada por el conflicto de las clases y cada vez más orillada a definirse en torno a los intereses de la clase dominante.

A estas alturas, no cabe duda que la *fracción preeminente dentro del bloque de dominación* la constituye el estrecho núcleo monopólico industrial-financiero que ha servido a la vez como cabeza de

playa, en los últimos tiempos, del capital extranjero, principalmente norteamericano. Esta fracción concentra y controla los centros clave de la acumulación industrial de capital, compartiéndolos con el capital estatal. Sin embargo, esta fracción monopolística no ha logrado establecer una *política única* frente al poder estatal y continúa delegando su representatividad en el *cuerpo del alto mando burocrático*, no sin negociar cierta cuota de participación. Lo previsible, a mediano plazo, es el surgimiento de condiciones que les permitan incurrir más directamente en el ejercicio del poder político, en tanto fracción preeminente del bloque de dominación.

¿RÉGIMEN CORPORATIVISTA O ESTATISMO ORGÁNICO DE LA SOCIEDAD CIVIL?

La enajenación ideológica de las clases sociales en la práctica del Aparato de Estado, la subordinación política de las mismas a los mecanismos de control que dan vida al conjunto del *régimen político*, habitualmente han sido caracterizados como un sistema corporativista. Un sistema que bien podría semejarse a un *adocenado fascismo*, con pocas de sus evidencias lacras y muchas de sus virtudes, referidas éstas a la eficiencia del control social con que hasta ahora ha operado.

La estatización de la sociedad civil obedece más a un proceso de integración orgánica del liderazgo político, en ausencia de una madurez orgánica dentro de cada clase, que a un *régimen de estructuración estrictamente vertical* de las clases en torno al Estado. Las clases en sí mismas, en cuanto conglomerados sociales determinados por su función respecto al aparato productivo, han establecido una relación con el aparato de Estado de manera diferente cada una de ellas.

Clase dominante y aparato de Estado. La determinación del Estado en la conformación de la clase dominante a partir de su política económica evidentemente ha sido de suma importancia: *la economía antes que la política y la política como intermediación de la práctica económica*. En realidad ha habido vertientes en este proceso que hay que tener muy claras.

1] La identificación plena de un sector de la clase dominante con la práctica y naturaleza del Estado mexicano. Tal *identidad obedeció* a una clara dependencia de su fortalecimiento y expansión respecto a la *práctica económica* del Estado. Conformó sus propios organismos empresariales, a instancias mismas de la dirección estatal. Su participación política quedó reducida a *la práctica de un grupo importante de presión frente a su propio Estado*, que en lo fundamental respondía directamente a sus intereses más inmediatos. Su propia debilidad orgánica en el campo económico explica en parte su comportamiento sumamente dependiente en el pasado

2] a finales del siglo tuvo su origen otra fracción de la clase dominante que se desarrolló al estilo propio, guardando las distancias, de ciertos grupos empresariales norteamericanos, es decir, con gran independencia respecto de la práctica económica del Estado, sin decir con ello que ésta no le favoreciera. Diseñó su propia estructura industrial y financiera, estableció su relación con el trabajo asalariado por ella comandado al margen de la intermediación de la *clase política nacional*. Frente al nacionalismo del Estado, postuló su propio proyecto, apareciendo muchas veces como la fracción de la clase dominante más conservadora en el plano de la política y, al mismo tiempo, la más modernizante en el campo de lo económico. Los frecuentes enfrentamientos entre esta fracción y su propio Estado se ubicaron en lo fundamental, en el pasado, en el campo de la confrontación ideológica, como forma camuflada de la separación de su poder económico en ascenso y su ausencia real en las alturas dominantes del mando político. Esto ha sido una constante que encuentra su límite en la actual crisis política nacional: *De la confrontación ideológica al conflicto interburgués*. Su capacidad de enfrentamiento y sus nuevas exigencias quedaron manifiestas, indudablemente, en el sexenio pasado.

Lo que está en cuestionamiento es la propia eficiencia de la clase política y sus mecanismos de control, en este caso, las relacionadas con la propia clase dominante en su conjunto.

La respuesta parcial que la clase política ha dado hasta el momento, la darse cuenta que no basta ya, ahora, una política económica favorecedora de los intereses inmediatos de la clase dominante, radica en el inicio de un cuidadoso proceso selectivo de captación de algunos de sus representantes por parte de la burocracia política, intentando mantener al mismo tiempo las distancias hasta ahora establecidas entre los dos poderes; estatal y el económico privado. Sin embargo, bajo el camuflaje de nacionalismo, algunas veces más aparente que real, un sector de la tecnoburocracia, como parte de la clase política, empieza a optar claramente por una definición más precisa del Estado en torno de los intereses de la oligarquía industrial-financiera. Ha operado, pues, un lento proceso de reacomodo en la correlación de las fracciones de la clase dominante que se traducen en el evidente conflicto dentro del *espacio estatal*. Los intentos de respuesta han sido múltiples: desde el incipiente, éste sí corporativismo de la tripartita ideado por Echeverría, hasta el postulado de la Alianza Productivista de López Portillo. Es de hacer notar que ambas respuestas siempre intentaron poner a resguardo incólume el mecanismo de las decisiones e insistieron en mantener la participación de la clase *dominante* a través de la representatividad de la clase política, que era y es precisamente lo que en el fondo está en virtual cuestionamiento: se hace pero no se dice, se sobreentiende pero no se precisa. La práctica ideológica establecida, que opera con gran inercia, impide por el momento el cambio cualitativo de una fracción

de la clase política por personal política directo del gran capital: al tiempo hay que darle tiempo, las condiciones están maduras para ello.

Las clases subalternas y el Estado. Evidentemente, en la fase que antecede a la revolución mexicana, lo más avanzado en cuanto a ideología y grado de organización, es la propia clase dominante, cuyos sectores más avanzados cuestionan el *establecimiento* del porfiriato; su proyecto de modernización se entrecruza con el cuestionamiento social desde abajo. La Revolución se convierte así en el vértice de la confluencia que desgarró a la clase dominante tradicional y, al mismo tiempo, rearticula y cambia cualitativamente la estructura de las clases subordinadas. El soporte consolidador de las estancias de este cambio es, indudablemente, el *Nuevo Estado* surgió de la Revolución, que nace impregnado de la diversidad de proyectos que cada una de las clases postuló como banderas durante el conflicto armado. El *fetichismo transformista* de la ideología surgida de la Revolución involucra a tal grado la incipiente conciencia de las clases subordinadas emergentes, entre ellas el proletariado, frente al Nuevo Estado, que desemboca en una *identidad* de sus intereses con el aparato de Estado. La administración, por no decir manipulación de esta supuesta, y en parte identidad se basa en el control de una *clase política* organizada a partir de la acción y el control de los dispositivos del aparato estatal.

Evidentemente este proceso no estuvo carente de fracturas donde pudo haberse gestado un rumbo diferente del desarrollo social. Con bastante frecuencia fue cuestionado el papel del Estado en su permanente esfuerzo por organizar e influir en el conjunto del cuerpo social. La anuencia de una *contraideología proletaria*, explicable por la propia *desorganicidad de las clases dominadas*, trasladó, a final de cuentas, a la *clase política naciente* el papel dirigente de las clases subordinadas; sin embargo, es importante señalar que las primeras luchas por darse sus propias organizaciones están marcadas, en lo fundamental, por corrientes políticas que se forman en su seno, cuya conducta política, al menos en las primeras manifestaciones, se define con independencia del Estado.

Así, la historia política de las clases subordinadas se trastoca en la propia historia del Estado mexicano. Su praxis económica incide en la formación de los principales destacamentos de la clase obrera convirtiéndose así en su inicial y principal interlocutor. Este proceso objetivo facilita enormemente la función de intermediación de la clase política: la eficiencia lograda se explica en gran parte por ello. El tutelaje ideológico y político ejercido explica en lo fundamental la capacidad negociadora del Estado frente a la propia clase dominante. Así, la negociación entre las clases opuestas empezó a ejercerse *en el seno mismo del espacio estatal*; cada clase delegó su representatividad y renunció a su organicidad interna, a su propio estatuto político, trasladado éste *a todo un sistema de*

interacción y equilibrio orgánico de las clases que conforma el actual régimen político.

Las clases subalternas se articulan con el aparato de Estado a través de una cadena de intermediaciones que va del sindicato o asociación profesional al sector del partido, del sector del partidario a la cúpula partidaria y de ésta al alto mando político. Sin embargo, cada constelación de sindicatos mantiene su independencia, traza sus líneas de acción y actúa políticamente en función de la coyuntura, establece sus propias alianzas con los diferentes niveles del personal político del Estado y mantiene su específica relación con el capital. En cuanto al organismo cúpula, el Congreso del Trabajo, es clara la independencia del juego político interno frente al Estado; esto es, sin duda alguna, uno de los grandes factores de la estabilidad en el pasado. De ahí que constituya una incorrecta apreciación el considerar la *cúpula sindical* como una *simple extensión del Estado* en los marcos de la sociedad civil.

EL SISTEMA POLÍTICO COMO ESPACIO DE LA CRISIS

Consideremos al *sistema político* como la forma en que se encuentra organizada la participación de las diversas clases sociales en el espacio de relación entre la sociedad civil y el aparato de Estado: la estructura partidaria, el sistema electoral, la participación parlamentaria, la estructura sindical y la estructura empresarial. En un sentido general, el sistema político como forma de relación de las distintas clases sociales entre sí y frente al estado sintetiza, en lo fundamental, los diversos impulsos y planteamientos y acción política de las clases. En el caso de México nos encontramos con un sistema político organizado, en lo fundamental, de manera vertical desde las alturas dominantes del poder; un sistema político sumamente estatizado, salvo un cierto número de organizaciones sindicales y políticas organizadas con autonomía e independencia frente al poder estatal y que, por largo tiempo, han constituido una *sociedad política marginal*.

El PRI-Gobierno. *¿Una falsa identidad?* Nada ha sido más absurdo por parte de algunos sectores de la izquierda nacional, que el hecho establecido una función mecánica y lineal de subordinación del partido oficial al aparato de gobierno. El PRI, en este caso, sería uno más de los *aparatos de Estado* que normalmente contribuyen al proceso de mantenimiento de la hegemonía de la clase dominante, tanto en el terreno de la práctica política como en el de elaboración de ideología. Como toda verdad a medias, ya sea por su simplismo o por generalidad, bloque, a final de cuentas, el conocimiento del hecho real en su esencia. La tesis anterior tiene como punto de partida una concepción que niega la

existencia del PRI como partido político y ubica al organismo como un aparato de Estado que funciona, casi en exclusividad, como oficina electoral que se activa en cada coyuntura de elecciones. Evidentemente la influencia gubernamental en muchas de las decisiones importantes del organismo es un hecho, y también lo es la cara oculta que nunca hemos querido o podido descifrar, la existencia de una *estructura permanente* de indudable carácter partidario, que involucra un *enorme aparato de direcciones intermedias* ligadas a los organismos de base y que expresan una militancia que se ubica en todo tipo de asociaciones, laborales, profesionales o empresariales.

Partido organizado más por intermediación de liderazgo que corporativamente, a partir de la participación de sindicatos y asociaciones que por su lógica de existencia tienen vida propia y representan definidos intereses de clase, que el partido amalgama y equilibra, al mismo tiempo que respeta sus instancias de dirección y de participación interna, por muy raquítica que ésta sea. En otras palabras, el conjunto de las clases y fracciones de clase mantienen al margen del partido una parte de su práctica cotidiana a través de sus sindicatos y asociaciones y, por el otro lado, participan activamente en su interior, a través de su *personal político*. ¿Partido de masas? Aunque es paradójico afirmarlo, sí y no. ¿Partido de cuadros? Fundamentalmente sí, aunque con sus matices y peculiar especificidad.

En el caso del PRI no se dan las distancias usuales, propias de los países desarrollados, entre las instituciones de la sociedad civil y el *espacio estatal*. El PRI funciona como institución de intermediación entre los dos campos de la actividad ciudadana; reproduce en su interior lo que opera diferencialmente en las sociedades capitalistas desarrolladas, pero al mismo tiempo, sin cancelar la práctica de sus afiliados en cada campo; *ni la práctica política cancela la actividad sindical, ni la dinámica propia de las asociaciones impone al partido una práctica de exclusivo carácter gremialista*.

Partido como mediación entre el Estado y la sociedad civil, en una sociedad en alto grado estatizada, al menos en los sectores sociales más organizados; sociedad civil que penetra en el espacio estatal a través de sus liderazgos políticos sindicales, profesionales y económicos, tanto intermedios como de cúpula. La particularidad de este fenómeno radica en que las masas adscritas al partido mantienen un dualismo en su praxis social; económica y política. Su militancia política opera por delegación de representatividad a través de los liderazgos sociales y sindicales que en su conjunto, podemos afirmar, constituye el andamiaje del partido como tal; en cuanto a su praxis cotidiana, sindical, social y económica, mantienen la dinámica propia que es propia de la sociedad civil.

En síntesis: partido político firmemente arraigado, al menos hasta ahora, en la práctica de sus

asociaciones de base y, a la vez, articulado estrechamente en las alturas dominantes con la praxis de la actividad gubernamental.

Resulta formal, a estas alturas, discutir la ausencia o presencia de los rasgos propios del partido tradicional, que por lo demás ha entrado en crisis en las sociedades avanzadas. Lo esencial, desde nuestro punto de vista, es si cumple o no las funciones del mismo y lo que no deja de ser interesante, cuáles funciones cumple que no son precisamente propias del partido tradicional. La historia política del país nos dice que las clases sociales en el periodo posrevolucionario no alcanzaron la suficiente madurez para organizar sus propios partidos y el Estado cumplió en lo fundamental tal papel, construyendo su representatividad en el plano político en un solo partido. Las clases, aun hoy, no han dado el salto cualitativo de ser clases para sí; lo son para el Estado, son sus objetivos, más que sujetos con diferenciadas alternativas y, en este caso, la propia clase dominante no se encuentra al margen de esta dialéctica social, en el campo ideológico no ve al Estado como suyo en exclusividad, aunque en el plano material su intermediación le ha favorecido enormemente.

La intermediación política real entre las clases sociales en nuestro país ha sido ejercida por una clase política, cuyo contenido como categoría social rebasa en mucho el concepto de *burocracia política*. Es un estrato social que aglutina en sí al conjunto de las clases que se aglutinan en el partido oficial, así como al propio liderazgo estatal, tanto a nivel de cúpula como en sus eslabones intermedios. La viabilidad del modelo empieza a ser cuestionada por el propio desarrollo natural de las diversas clases y fracciones de clase, es decir, en principio, por su magnitud cuantitativa. El hecho real es que nuevos conglomerados surgidos en el pasado reciente empiezan a quedar fuera de este modelo de participación. Evidentemente este desarrollo cuantitativo es peculiar para cada clase y, además, implica al mismo tiempo el propio proceso de reordenamiento social generado por el desarrollo del capitalismo, que se expresa en la conformación de un gran sector de marginalidad social, al cual le es ajeno todo tipo de organización vinculada al modelo participativo del régimen político mexicano.

Liderazgo de las clases subalternas y participación en el poder constituyen un todo orgánico que sintetiza la práctica del partido oficial; ahí radica su fuerza y, al mismo tiempo, su gran debilidad histórica proyectada al futuro. Que sea un partido pluriclasista es en realidad una tautología pues no ha habido partido burgués que no lo sea. El PRI constituye uno de los organismos que impone una ideología al conjunto social; al mismo tiempo que se encuentra cruzado de arriba hacia abajo por el conflicto real de las clases, por largo tiempo subyacente en la historia política de la nación, pero no expresado, salvo contadas ocasiones, de manera orgánica, que es precisamente el *momento* en que la

clase se convierte en tal en el ámbito de la sociedad moderna. *Clases a medias que no logran expresar sus propios contornos ni contenidos y mantienen difusos sus perfiles políticos*, esto es lo que hay en nuestro país. Su conciencia de sí se encuentra enajenada en el aparato de Estado, al mismo tiempo que sus intereses entran cada vez más en un conflicto que prefigura la *crisis* del modelo existente.

Esta inmadurez política de las clases, tanto las subalternas como la propia dominante, este trastocamiento de sus relaciones (cuando no pactan entre sí, cuando no se enfrentan entre sí, es un hipotético espacio de la sociedad civil y lo hacen en cambio dentro de Estado) es lo que ha permitido la existencia de una *clase política* convertida en vocero directo de cada clase social; el liderazgo político de las clases se trastorna en el liderazgo político del Estado y viceversa. Sin embargo, este trastocamiento no implica identidad.

LAS CLASES MEDIAS Y EL RÉGIMEN POLÍTICO

El desarrollo del capitalismo en la forma concreta en que se ha desarrollado en México, bajo la égida parcialmente proteccionista del Estado, tuvo como resultado la configuración de una estructura social donde los sectores medios asalariados y de otro tipo de ingresos *pasaron a constituir una parte importante de la sociedad política mexicana*. Sectores hasta cierto grado beneficiados en sus ingresos y demás prestaciones que mantuvieron, durante el periodo denominado estabilizador, un status de conformidad con el sistema establecido. Ello puede explicarse por el propio desarrollo del capital privado al generarse una infraestructura ocupacional que se desarrolló y consolidó bajo su amparo. En la misma dirección, la capacidad que se arrogó el Estado a través de su intervención directa en el campo de la economía y de los mecanismos que desarrolló para redistribuir una parte de la plusvalía social y de los ingresos directos, incidió en la conformación de estos *sectores sociales intermedios*. En realidad, sólo una parte de ellos quedó encuadrada por medio de sus organizaciones dentro del partido oficial. El sector de más altos ingresos de las capas medias ha estado tradicionalmente al margen de la actividad política, manteniéndose como una importante reserva social de derechización del sistema. Mención aparte merece aquel sector que se ha reivindicado toda una tradición de lucha en torno a objetivos democráticos y revolucionarios, que ha mantenido una continuidad y que parcialmente se ha aglutinado en torno a organizaciones y partidos políticos de tendencia democrática y revolucionaria.

LA CLASE DOMINANTE Y EL RÉGIMEN POLÍTICO: LA INTERMEDIACIÓN EFECTIVA

DEL ALTO MANDO DE LA BUROCRACIA POLÍTICA

Fue a partir de la iniciativa estatal que el sector empresarial creó sus organizaciones gremiales por ley. Se generó así una *estructura gremializada de los empresarios* a partir de los diversos espacios y sectores de operación de sus capitales. Se creó así un *sistema de base* que históricamente ha tendido, por su propia dinámica, a construir una *cúpula representativa* de todo el sector, que ha convalidado un ejercicio de representación, fundamentalmente frente al Estado y no frente a la clase obrera bajo su mando. Ha prevalecido así la negociación de acuerdo o desacuerdo en materia económica que el alto mando de la burocracia ha sabido, según las circunstancias, traducir al lenguaje y la práctica de la política económica estatal.

La revolución mexicana y el papel del Estado como organizador político y capitalista colectivo constituyeron, por paradójico que así parezca, un *límite efectivo de carácter histórico* a la participación directa de las distintas fracciones de la clase dominante en la creación y el liderazgo de partidos políticos propios. La clase burguesa fue subsumida así en un *peculiar clandestinaje político*. Esta opción fue compensada por la eficiencia que paulatinamente fue adquiriendo una amplia *clase política* que tuvo como núcleo organizador al alto mando de la burocracia estatal y que se extendió sus tentáculos a través del partido oficial a una parte importante del cuerpo social de la nación.

El ejercicio del poder de clase que le fue delegado por el sector empresarial a la burocracia política, no canceló la coyuntural participación de personeros directos del capital en el cuerpo de mando estatal, ni tampoco los enfrentamientos parciales de distintas fracciones de la clase dominante con la política de Estado.

REFORMA Y CRISIS POLÍTICA

No cabe duda que sectores sociales tradicionalmente marginados de este *modelo de participación política* crecieron considerablemente en los últimos años, no sólo cuantitativa sino cualitativamente. Diversos movimientos de gran amplitud social quedaron al margen del control tradicional de carácter partidario y fueron inmunes a los efectos de la ideología oficial. Diversos partidos políticos de izquierda paulatinamente transformaron en forma cualitativa la oposición espontánea al sistema y fueron capaces de canalizar en el reducido espacio de la sociedad civil. Su clientelismo político es claramente definido a través de la acción de vanguardias y difusamente expresado en la coyuntura

electoral. Estas vanguardias han generado proyectos políticos alternativos al *establecimiento*. Se han centrado tácticamente en reivindicaciones que giran en torno a la *democracia* como supuesto necesario del fortalecimiento de la sociedad civil. Pareciera que lo que se quiere es la calca de la democracia burguesa de los países desarrollados, aunque no deja de haber intentos por definir *una forma de democracia avanzada de nuevo tipo*, aún no especificada en términos esenciales: forma indirecta de poner en el tapete de la discusión el tipo de *sociedad de transición* que se quiere y la estrategia política para lograrlo. Por primera vez, la Revolución Socialista con mayúsculas encuentra, en cuanto planteamiento, materialidad en el proceso real.

No obstante, y en esto hay que estar caros, se da el hecho de que la *reforma política* no ha dejado de ser una iniciativa aún controlada y determinada desde el poder, aunque el proceso real de la lucha política de la izquierda en el pasado no deja de tener importante incidencia y una potencial determinación en su curso actual. Aun así, es difícil hablar de *reforma política* mientras no se toquen las *instancias reales de poder* y se mantengan a salvo los *mecanismos de control* de las bases del partido oficial. Su alcance ha llegado sólo al estricto campo de lo *electoral*, con el propósito de cooptación por el poder de la *sociedad política marginal*.

La pregunta que surge es ¿cuál es la capacidad y cuáles los límites de renovación del sistema a partir de sus propios impulsos y sus propias contradicciones? La respuesta pasa por la necesaria *caracterización de la crisis* por la que actualmente atraviesa el sistema. ¿Es una *crisis de estructura* que compagina una *crisis política* y una *crisis económica*? ¿Es una *crisis política* que involucra en exclusiva las contradicciones de clase surgidas en la base social de sustentación del régimen político y por tanto del partido oficial? ¿Acaso hay una *crisis de poder* que implica la rearticulación de las distintas fracciones de la clase dominante dentro del bloque de dominación? Puede haber algo de todo y poco de nada, sin embargo algo no hay y es una *crisis* que confluya en una *situación revolucionaria*, de esto hay que estar claros, aunque no excluye la posibilidad del *ensayo general*. No es un problema de simple imaginación, es un problema de capacidad de análisis y posibilidad de acción revolucionaria.

Consideramos que lo determinante de la coyuntura actual es una *crisis de estructura*, que involucra la articulación de una crisis económica, que a estas alturas, encuentra su repunte en una crisis política. La discusión en torno a la crisis económica, su naturaleza y mecanismos de salida, es múltiple y de ello hay mucha información y diversas interpretaciones. En lo que se refiere a la crisis política, ésta constituye la primera e importancia que involucra al conjunto del régimen político en el periodo posrevolucionario.

Adelantaremos, pues, algunas de nuestras opiniones en cuanto a la *naturaleza de la crisis política* en la forma más concisa posible.

Es una crisis que fisura la *práctica hegemónica* de la clase dominante en el *nivel de las ideologías*. En este terreno se ha vuelto insuficiente la capacidad de convencimiento de grandes sectores sociales por parte de la así denominada *ideología de la revolución mexicana*. Los planteamientos de una *revolución permanente* chocan con la evidencia de un desarrollo económico, político y cultural marginalizante.

El *paternalismo estatal*, como parte de esta ideología, tuvo por principal objeto hacer coincidir, en la conciencia de las masas, el interés particular de las diversas clases subordinadas con la práctica estatal. Esta *falsa identidad* operó en la medida en que los efectos del desarrollo del capitalismo incidieron positivamente en la conformación y el desarrollo del conjunto de las clases subalternas, aunque son diferentes particularidades.

En el caso de la clase obrera, el proceso extensivo de la acumulación de capital determinó a partir de la desintegración de la composición del campesinado, constituyendo esta migración un importante mecanismo de retroalimentación de la ideología pequeñoburguesa a su seno. De ahí la acción del Estado encaminada a la conformación de toda una estructura de seguridad social, sobre todo para el sector más organizado. La manipulación ideológica de esta situación por parte de la clase política, fetichizando las capacidades del Estado, determinó en forma evidente un *conformismo de clase* aún fuertemente arraigado en grandes sectores de trabajadores. El desarrollo de la clase encontró explicación economicista en la acción del Estado benefactor, con el alto costo de su enajenación política en los marcos estrechos del sindicalismo oficial.

En el caso de los *sectores intermedios de transición* de la sociedad mexicana, no cabe duda que fueron sumamente beneficiados por un *mecanismo muy específico de redistribución de la plusvalía social* generada a nivel del aparato productivo por la clase obrera, y donde el Estado participó activamente a través de la política económica, así como también el mismo capital en su fase inicial de monopolización. Este beneficio, por situaciones aún no entendibles, generó la marginalización de la mayor parte de los sectores intermedios del quehacer político, expresándose su inconformidad en los momentos de la coyuntura política. No es casual que precisamente este sector sea el de menor grado de organicidad en la estructura sectorial del partido oficial.

En relación con la clase dominante, podemos encontrar diferentes efectos en su *ideología de clase* por parte del estatismo *económico e ideológico*. Sin embargo, queremos establecer en principio una

tesis que creemos es válida para el conjunto de la clase dominante en cuanto a su ideología general. El proceso histórico de la conformación de las clases modernas de la sociedad mexicana a partir de la acción estatal, determinó en alto grado un proceso de *sustracción de la capacidad de generar ideología* por los aparatos privados de la burguesía, dejando esta actividad en manos del *aparato estatal*. Clase sin ideología y Estado con ideología burguesa, eso fue precisamente lo que permitió el acelerado *transformismo de la ideología oficial* frente a los grandes sectores asalariados.

Se generó, así, una clase dominante desarmada ideológicamente en el ámbito de la sociedad civil frente a su propio Estado, clase subsumida en el *clandestinaje ideológico* como forma de subsistencia de su propia conciencia social. Frente al laicismo de su Estado, optó por el parapeto de la conciencia religiosa para dirimir parte de sus contradicciones políticas de coyuntura. Optó falsamente, al menos una de sus fracciones, por el liberalismo económico como forma de chantaje frente a la intervención del Estado en el campo de la economía, sabiendo de antemano que tal participación, en última instancia, le fue y le ha sido favorable. De esta manera, la clase política a través del Estado ha llevado hasta sus límites la *ideología posible de la clase dominante*, a pesar de sus permanentes reticencias y de su estrecha visión.

La presente es una crisis que lesiona severamente la *capacidad de liderazgo político* de masas por parte de la *clase política* de la nación. La relación Estado-Partido Oficial encuentra serios obstáculos: por un lado un partido que aglutina masas y que reproduce en su interior el conflicto de las clases: e su práctica cotidiana, éstas encuentran cada vez más ajena la práctica del Estado en su conjunto, en relación con sus intereses; por el otro, una clase dominante que intenta por primera vez el diseño de un proyecto para la conquista de su propio Estado, lo que reduce considerablemente la capacidad de juego e intermediación de la *clase política*.

Hay pues, dos polos de la contradicción en relación con la práctica del liderazgo de la clase política; uno relacionado con la propia clase dominante, el otro con la clase trabajadora y demás sectores subalternos. Veamos cada uno de ellos:

LIDERAZGO POLÍTICO Y LIDERAZGO SINDICAL

El trastocamiento de la práctica sindical en práctica política empieza a encontrar serios obstáculos por cuanto la crisis económica fisura esta unidad contradictoria. En general, el liderazgo de la clase política y en particular, de la dirigencia obrera, ha descansado en mucho sobre la eficiencia lograda por

las *prácticas del sindicalismo*. El relativo beneficio económico y ciertos márgenes de seguridad social obtenidos por el sector de trabajadores más organizados, generó una confianza y apoyo a la *práctica política* de la dirigencia sindical frente al espacio estatal y en su interior. El interés inmediato material quedó satisfactoriamente ubicado en los reducidos marcos del economicismo: *fue un cheque en blanco girado por los trabajadores y que sus líderes cobraron espléndidamente en le banco de la política estatal*.

La crisis del sistema económico fisura tal dialéctica de esta *falsa identidad* entre las dos prácticas: sindical y política. Hasta el momento, la política económica diseñada por el lato mando de la burocracia política ha optado por un pacto de contención salarial y limitación de demandas sociales con la dirigencia obrera; los resultados traducidos en la capacidad de su liderazgo tienden a hacerse evidentes.

La dirigencia obrera ha comprendido, o al menos intuye, que la salida a la crisis a costa desnivel de vida de los trabajadores bajo su mando e influencia, se traduce y traducirá con mayor fuerza, en el futuro, en un deterioro de su liderazgo, en un bloqueamiento de sus representatividad y en una disminución de su influencia dentro de la clase política. *El distanciamiento de la dirigencia obrera de sus bases determina su debilitamiento en le seno del espacio estatal*. La búsqueda de una salida, el intento de gatopardear, se ubica en un proyecto de *reforma económica* pero cuidándose bien de no tocar en absoluto el carácter y la forma d las relaciones políticas, a no ser la tácita aceptación de la así denominada “Reforma Política”.

Esta dirigencia vivió plácidamente las condiciones que permitieron su liderazgo; lo consolidaron pero no lo ampliaron. Capitalizaron políticamente, siempre en presente, lo que ahora comprenden debieron proyectar al futuro. Sin darse cuenta, el polo contrario de la contradicción, la clase dominante, creció y se consolidó, llegando al salto cualitativo de l más estricta monopolización y su lenta articulación con el aparato estatal en el campo de la economía. Esta dirigencia fue también víctima de la ideología generada por el conjunto de la clase política y administrada por el Estado, es decir, por su transformismo. La supuesta y en parte real solidaridad entre Estado-trabajadores, y el colocar erróneamente por medio de este mecanismo a los intereses de la clase dominante fuera del espacio estatal, se enfrenta ahora a una realidad cuyo sentido histórico no es precisamente en dirección al pasado.

Hay una fractura, no muy evidente y sí soterrada, dentro de la clase política, que consiste en la real oposición, generada por la coyuntura de la crisis, entre un sector de la dirección sindical y una parte de

la burocracia política, por un lado, y una tecnoburocracia que ha decidido, definitivamente aliarse a los intereses del gran capital y a los cuadros de la tecnoburocracia privada. En medio de este sandwich se encuentra la oposición de izquierda con sus propias alternativas y particular juego político.

Si bien la tradición histórica del Estado mexicano tiene un peso específico, si bien la constitución de las clases sociales modernas tiene un pasado y un presente determinado, si bien la *ideología estatística* ha tenido un efecto importante, creemos que la tendencia actual apunta a una reaccionarización en el campo de lo económico, que se expresará políticamente en el fortalecimiento de la alianza monopolios privados y tecnoburocracia pro-capital, con la consecuente pérdida de influencia de la dirigencia sindical y sus aliados estadólatras. Reminiscencia social de la presencia de ciertas capas intermedias dentro de la clase política, lo que alguien en el pasado denominó los *socialistas de Estado*.

Jugar esta contradicción es de vital importancia para las fuerzas de la oposición de izquierda; en el cómo radica la cuestión: el reformismo como fin o como medio vuelve a surgir con vital fuerza en la historia política de la nación.

La polarización de fuerzas dentro de la clase política pone en cuestión, igualmente, la parte más institucional del liderazgo de la clase política que es el *presidencialismo*. Cada fracción quisiera para sí este poder centralizado dentro del *espacio estatal*, pero todas empiezan a cuestionarlo por cuanto, cada vez más, se vuelve difícil la negociación interna por medio de la intermediación de un solo hombre; digámoslo de otra manera: se quiere un poco o mucho la *democratización en el ejercicio del poder en las alturas dominantes*. El interés de la clase dominante en un conjunto no encuentra mayor correspondencia en una centralización del poder político como el que hasta ahora se ejerce.

En todo caso, una supuesta democratización del mismo, no sería otra cosa que *la definición más precisa del poder presidencial en torno a una de las facciones d la clase dominante*, o en torno a un nuevo sistema de alianza en le bloque de poder, que significaría un cambio en las reglas del juego en el seno d la clase política y, a la vez, su incidencia en necesarias modificaciones del propio *régimen político*.

Quizá una de las dificultades por las que atraviesan las fracciones más importantes de la clase dominante es la parcial ausencia de su propio personal político, salvo el que ya se encuentra dentro del Estado plenamente consciente de su estrategia de alianza con el gran capital. Esta situación apunta, en el futuro inmediato, a futuras evoluciones palaciegas, empezando con ensayos, el primero de los cuales bien puede ser la próxima sucesión presidencial.

Es una crisis que repercute en todos los partidos políticos de la nación, desde los marginales, por ahora legalizados, hasta los aceptados durante largo tiempo por el *establecimiento político*, y ello simplemente por el reacomodo de las clases sociales en su conjunto, por sus parciales radicalizaciones tanto a la izquierda como a la derecha, por su crecimiento cuantitativo y por sus propias transformaciones cualitativas que hacen estallar por los aires las tácticas y estrategias de los partidos, diseñadas éstas durante un largo proceso de estabilidad social y desarrollo económico.

La definición precisa sobre la crisis y la naturaleza de la fase actual del capitalismo en nuestro país, no puede reducirse al análisis cuantitativo de la economía, sino trascenderlo a los cambios provocados en la estructura y la correlación de las clases sociales y cómo este proceso, por un lado, sensibiliza a los partidos políticos en términos de sus estrategias y, por el otro, los rebasa. Los parámetros de la acción revolucionaria se ubican en el conocimiento e los polos de la contradicción social: capital-trabajo asalariado. El análisis de la configuración social y política de cada polo de la contradicción se hace indispensable. ¿Acaso las clases no se desarrollan cuantitativamente? ¿Acaso no se modifican sus perfiles en relación con las demás clases y fracciones de clase? ¿Acaso no cambian o tienden a modificarse sus relaciones con el aparato de Estado? Tofo ello necesariamente incide sobre el *proceso de continuidad o ruptura* de las relaciones políticas existentes y, por último, del *régimen político mismo*.

En última instancia, las relaciones políticas imperantes, la acción de los organismos e instituciones políticas –partidos y aparatos de Estado- traducen parcial o veladamente los cambios operados en la estructura social a través de sus tácticas y planteamientos ideológicos, de sus virajes o anquilosamientos y de su propia acción política cotidiana.

Todo lo anterior, como postulado general, encuentra dificultad de aplicación en una sociedad como la nuestra, donde el actual espectro de partidos políticos no expresa aún, con la suficiente claridad, los cambios operados en las clases y sus mutuas interrelaciones. La coyuntura electoral, asimismo, no revela los cambios operados en las relaciones políticas de las clases, salvo el hecho de que se ha generado un espacio social traducible en votos para el conjunto de partidos políticos registrados y en particular para la así denominada *oposición de izquierda*.

Las viejas oposiciones al sistema y sus correlativas tácticas políticas evidentemente tienden a caducar. El reduccionismo de la crítica ideológica de partidos como el PAN, el apoyo crítico del PPS, el apoyo indiscriminado del PARM, no corresponden a realidades vigentes. Frente a este atraso o crisis partidaria de los partidos tradicionales, surgen las propias críticas más trascendentes que se dan

dentro del partido oficial. El conflicto real de las clases, al menos en cuanto a sus intereses más materiales, encuentran así mayor definición no en estos partidos frente al poder, sino dentro del poder mismo.

El clientelismo de los partidos políticos tradicionales no está ubicado precisamente en el espacio social que sintetiza el núcleo de la contradicción del sistema: trabajo asalariado-capital; se ubica, más que todo, en los sectores de la periferia social, y más en el campo de la ideología que en el movimiento real de las masas. De ahí su crisis de alternativas, pues no han captado igualmente los cambios que han operado en los sectores subalternos donde actúan.

¿Y LA REVOLUCIÓN?

La crisis de la formación social mexicana constituye el cierre y consecuencia de toda una fase del desarrollo económico, social y político: fase de transición a un nuevo estadio del desarrollo de México. Las tendencias concentradoras y centralizadas de la reproducción del capital sentaron las bases, en este periodo, para la organización monopólica del capital industrial y bancario, fortaleciéndose, al mismo tiempo una nueva fase, no carente de contradicciones, en el desarrollo de las fuerzas productivas, impulsando de esta manera perfiles más nítidos en la constitución y el desarrollo de las clases sociales. Ello implica, necesariamente, la redefinición de la estructura social del país y, por lo tanto, el surgimiento de nuevas condiciones para el redespliegue de la lucha revolucionaria de las clases explotadas por el capital y, en primer lugar, del proletariado industrial y agrícola. De ahí que la nueva fase del capitalismo exija la reformulación de las principales tareas de las fuerzas democráticas y revolucionarias.

El desarrollo y consolidación de los monopolios en nuestro país ha significado en el campo de lo social el deterioro de las condiciones de vida, no sólo de la clase obrera, sino también de la amplia capa de los trabajadores asalariados. A estas alturas no cabe la menor duda de que el proceso inflacionario ha constituido un mecanismo que ha trasladado una parte del fondo de salarios al fondo de acumulación de capital. La respuesta parcial que la clase trabajadora ha dado se expresa en un primer momento, a través de movimientos sociales de clara reivindicación económica y que no pocas veces desemboca en definidas luchas de carácter sindical y político.

Al cambio en el desarrollo de las fuerzas productivas comandadas por el capital le ha correspondido un lento reordenamiento de las relaciones sociales de producción; ello ha quedado evidenciado por la

crisis sectorial de la agricultura y por el atraso de la organización sindical a nivel nacional. Sin dejar de ser importantes este tipo de contradicciones a nivel de la base económica, no cabe duda de que el aspecto crítico de la crisis se ubica en la relación contradictoria entre el grado de desarrollo alcanzado por la estructura económica y el régimen político sobre el que se ha sustentado el ejercicio de la dominación extraeconómica de la clase dominante.

LOS TIEMPOS DE LA CRISIS POLÍTICA

El desarrollo político de la nación, a partir del movimiento estudiantil-popular de 1968, está marcado por diferentes momentos críticos que manifiestan cómo el sistema ha buscado sortear las crisis coyunturales de acuerdo a la instancia en que se han manifestado y en función de los sectores sociales que se han involucrado. Analicemos cada uno de estos momentos para poder entender la perspectiva que se abre en el campo de la lucha social.

Primer momento. La lucha del 68, a nuestra manera de entenderla, constituye el preámbulo del conflicto real de las clases antagónicas de la sociedad mexicana. Los estudiantes, en aquel momento, constituyen la avanzada política de los amplios sectores intermedios de asalariados que tienden a cuestionar, en lo fundamental, el autoritarismo de la sociedad política: el sistema político era cuestionado así en sus manifestaciones más generales. El movimiento anuncia lo que se estaba gestando más allá del campo de las clases intermedias, ellas sólo constituían su eco primigenio.

Segundo momento. El resurgimiento de la lucha en el campus universitario en torno a la reforma educativa constituye en 1971 la primera recuperación del movimiento popular después de la barbarie del 68. Esta lucha se constituyó en escenario político de algo que se gestaba en las alturas del poder. El centralismo en el ejercicio del poder estatal no es ajeno al conjuntote la clase política, y cuando ello ha sido motivo de cuestionamiento en el pasado, el conflicto por lo regular se ha dirimido tras el telón del aparato estatal, conociéndose en el ámbito de la sociedad civil, por lo regular, siempre a posteriori, es decir, por sus resultados. 1971 marca el primer ensayo de venideras disputas por el poder entre los propios grupos fuertemente consolidados de la clase política y estrechamente consolidados, algunos de ellos, con el poder económico.

Tercer momento. Esta misma situación de férrea centralización afecta, sin lugar a dudas, al conjunto de la clase dominante. 1976 marca la pauta del distanciamiento de la clase dominante y, en particular, del sector monopólico, respecto de su propio Estado. El ensayo neopopulista de Echeverría

por renovar el pacto social del Estado con las clases dominadas socava la confianza del sector empresarial. El ensayo, al mismo tiempo, pretende renegociar y ampliar la función de intermediación de la burocracia política al frente del Estado, posibilidad que en una primera instancia se ve reducida al mínimo por la crisis económica y que, posteriormente, encontrará ciertos cauces en el presente régimen.

No quisiéramos dejar la impresión de que sostenemos la idea de una crisis política que se prolonga indefinidamente en el tiempo sin clausura alguna. Quizá lo pertinente sería afirmar que el proceso de adecuación del régimen político al nuevo estadio alcanzado por el desarrollo de la estructura económica capitalista está marcado por crisis recurrentes, algunas de las cuales cancelan en definitiva el conflicto generado con los sectores sociales o fracciones de clase en pugna y otra vez dejan la impronta de un conflicto no solucionado, transfiriéndose su posible solución en el tiempo. Lo general, en todo caso, que le da sentido al conflicto político y que nos parece que es necesario rescatar con la mayor claridad posible, es que las dos clases fundamentales de la sociedad mexicana, potencialmente, cuestionan, cada una a su manera, el tipo de relaciones políticas existentes. La clase dominante encuentra insuficiente la intermediación de la clase política y plantea, aunque por el momento en forma balbuceante, una relación más orgánica con su propio Estado. Del lado de las clases subalternas, sus sectores más avanzados se dan cuenta ya de las propias limitaciones de la reforma electoral y aquellos sectores controlados por el sindicalismo oficial ven reducidas sus expectativas en el tradicional Estado benefactor; de ello indudablemente es consciente la cúpula dirigente, pues sólo así pueden entenderse sus planteamientos, al menos por ahora en el campo de las proposiciones, entorno a la necesidad de reformas económicas.

En la coyuntura actual surgen, pues, varias interrogantes en torno a la perspectiva revolucionaria, en tanto que el presente contiene ya los elementos que permiten prefigurar las alternativas posibles del cambio social en el futuro. Trataremos de hacer una enumeración de las condiciones del conflicto político bajo la doble óptica de las fuerzas actuantes, es decir: tanto del poder como de la revolución misma.

EL RÉGIMEN POLÍTICO COMO FORMA ORGANIZATIVA DE PODER BURGUÉS

El régimen político como forma específica de la dominación, como ejercicio determinado del poder, se ha caracterizado en nuestro país por el papel preeminente que ha jugado el Estado, tanto en

su organización como en su funcionamiento. Pocas piezas de la arquitectura política del Occidente capitalista han mostrado tanta coherencia y grado de organicidad; régimen que se caracteriza por la adscripción de las principales luchas organizadas de los trabajadores asalariados a un sistema de alianzas de clase dirigido por una amplia clase política que va de los altos mandos de la burocracia estatal hasta los cuadros dirigentes intermedios de la estructural sindical. La crisis puso en movimiento lo que en el pasado se presentaba con una amplia estabilidad; la relación política de las clases subalternas con el Estado, administrada desde las alturas del poder.

Los límites para mantener esta relación constituyen al mismo tiempo las posibilidades de su desmantelamiento. De ahí la importancia del principio de diferenciación de las fuerzas revolucionarias de esta práctica política. La independencia de las luchas populares y, en particular, del proletariado frente al Estado protector, se convierte en punto clave en el reordenamiento de las fuerzas políticas que propugnan el cambio social.

En este contexto, no hay que olvidar los impulsos internos por la renovación del pacto social entre los trabajadores y la clase política. Pacto social que encuentra cada vez más reducida la base material sobre la que se sustentó en el pasado. La perspectiva no es tan clara para la clase dirigente, por cuanto permanentemente se tenderán a dar importantes desprendimientos de trabajadores o reagrupamientos de clientelismo político entre los diversos destacamentos del aparato sindical oficial. Ello obligará en el futuro próximo a un magno intento, que la coyuntura exige, para mantener el liderazgo de la cúpula dirigente, por darle unidad nacional al proletariado del país. La forma en que este proceso se dará puede ser múltiple y el papel que la izquierda puede jugar radicará en la capacidad que se tenga para incidir en este proceso en dos frentes por un lado, la lucha en sí misma por la unidad sindical a nivel nacional y, por el otro, los avances que se puedan lograr por el desmantelamiento de la hegemonía estatista sobre el movimiento obrero.

El tiempo político de las fuerzas revolucionarias pasará, así, de los límites de la reforma electoral al cumplimiento de la reforma política, que pasa necesariamente por el desmantelamiento de la base sobre la que se sustenta el régimen político actual, es decir, por el ejercicio de una práctica democrática en la célula misma del sistema; el sindicalismo oficial. De ahí que el contenido fundamental de la lucha revolucionaria en la etapa que se inicia radique en ganar para la revolución una fuerza material, un núcleo proletariado en torno al cual se pueda reorganizar a los movimientos políticos actuales, por cuanto parte de ellos, por importantes que hayan sido, se han dado en la periferia de asalariados y por sí solos han encontrado importantes limitaciones en el despliegue de su

lucha. Por ello no basta por sí mismo el despliegue de la teoría que producen las vanguardias organizadas, si ésta no encuentra su correlato real en el movimiento obrero.

El medio no radica, a nuestra manera de ver las cosas, en postular la democratización del actual régimen político. Esto sería no más que un recorrido circular para volver al mismo punto de partida, ya que es precisamente el actual régimen político la clave del ejercicio del poder burgués y constituye la barrera infranqueable al desarrollo político de la nación, tal y como está estructurado hasta el presente. De ahí la necesidad de replantear la alternativa en torno a la cancelación del actual régimen político sobre una sola base, ganar la libertad de sindicalización frente al Estado, cuyo control vertical constituye una de las razones de ser y comportarse de la hegemonía extraeconómica.

Así, el movimiento revolucionario, como dirección más elevada de la lucha política del proletariado y sus aliados potenciales, encuentra en la lucha por la democracia en la base misma del sistema el eje más importante de su táctica actual. Es en este nivel donde el establecimiento político defenderá con mayor empeño sus posiciones. Una cosa es conceder y desde luego no gratuitamente, un espacio en la parte menos importante del poder: el parlamento; otra, ceder ahí donde el sistema adquiere su real fuerza material.

El capitalismo impone una barrera difícil de atravesar, entre la democracia formal de los derechos del ciudadano, y la democracia real en el centro del comando de la actividad productiva del capital separando así el campo de la política del campo de la economía. Por ello. No se trata de tomar a la democracia per se como una más de las banderas del movimiento revolucionario, bajo riesgo de convertirla en un fetiche; vincularla a la revolución, es abrir paso a su potencialidad extrema, ¡que muestre su verdadero carácter subversivo y anticapitalista!

Dada la historia política contemporánea de las clases sociales y dada la naturaleza concreta del Estado mexicano, la lucha por la democracia en nuestro país no puede constituir una simple bandera ideológica, un postulado abstracto, ni tampoco un método más de la lucha revolucionaria: es su propio contenido. Es, pues, el ambiente más general de toda lucha concreta, constituye el principio que atenta directamente contra el centro de la constitución del poder real de la clase dominante en la esfera de las relaciones políticas. La lucha por la independencia política y sindical del proletariado significa avanzar en un dificultoso proceso de desmantelamiento de un régimen político que respira por todos sus poros el ambiente estatal. Es lanzarse a la búsqueda del tiempo perdido de una historia política de las clases dominadas que en muy pocos espacios, e el pasado, lograron expresarse al margen del tutelaje del gran Leviatán mexicano. Esta búsqueda implica recuperar a vitalidad intrínseca de las clases explotadas por

el capital a partir de su constitución y organización autónoma frente al Estado. Fortalecer y desarrollar una sociedad civil por ahora marginal, en tanto que la historia concreta de la nación muestra cómo aquella fue cercenada y deglutinada parcialmente por los innumerables aparatos de Estado; desde el más alejado de los sindicatos y la más simple cooperativa hasta un sistema partidario levemente remozado por una aparente independencia. La naturaleza de esta vertiente en la lucha revolucionaria tarde o temprano cuestionará a fondo la estructura real del poder político de nuestro país.

A estas alturas de la lucha, queda claro cómo ha quedado desvirtuada la práctica política de las clases sociales en su conjunto, clases que se han pensado y actuado a partir o a través del Estado, clases a medias que no se han diferenciado por sus proyectos en tanto ello no ha sido posible. Este aletargamiento estatista históricamente ha concentrado un enorme potencial del conflicto social, siempre diferido, siempre administrado; al desplegarse se vivirá en cortos tiempos lo que no fue normalidad en el pasado.

De ahí que pensar idílicamente que todo lo anterior, a pesar de que no se basa en una perspectiva inmediata de la revolución, será algo fácil, sería desconocer virtualmente la realidad política de la nación. La lucha por la democracia con un contenido revolucionario significaría en todo momento contraponer un poder del conjunto de las clases dominadas, desde la propia base del sistema, a un régimen político que por su naturaleza y forma concreta de ser cancela toda alternativa que vaya más allá de la práctica formal de la representación burguesa. El mismo régimen, por su historia, no puede pensarse a sí mismo fuera de sus límites orgánicos. Y, aún más, todo impulso reformador que surja desde su propia dinámica interna, siempre estará al borde del conflicto político capaz de trascenderlo.

La lucha por la democracia arranca, pues, por el virtual desmembramiento del sistema político en su base; en la desarticulación de todo tipo de organización sindical o profesional, respecto del aparato estatal. Tal es el principio de toda lucha socialista; la autonomía de clase. Si somos atentos a la historia política de la nación en el periodo de la posguerra, esto ha sido el hilo conductor de las luchas populares; la dominación estatista de las clases asalariadas nunca ha permanecido en completa calma, la rebelión siempre ha estado tras una puerta ni completa ni herméticamente cerrada.

Este despotismo estatista en el campo de las relaciones políticas entre clases ha constituido en el pasado el principal obstáculo en la relación de los partidos o grupos de izquierda con los sectores asalariados, y ha constituido la condición material de un desarrollado vanguardismo entre ellos. Siempre excluidos de la clase obrera por la fuerza, o por la barrera de la ideología reformista, han alimentado el sueño de la representatividad, más por derecho histórico que la teoría les brinda que por

situación real. Sin que lo anterior sea verdad absoluta, hay que mantener y desarrollar la dificultosa relación de esta izquierda con los sectores asalariados intermedios y con el campesinado y con el reducido núcleo de la clase obrera industrial.

Ha habido en nuestro país todo un entrecruce de prácticas políticas, partidos funcionando como expresión aglutinada de sindicatos y asociaciones profesionales, sindicatos con claros postulados y estrategias partidarias, y entre ellos una infinidad de grupúsculos con pretensión de partidos. Tal ha sido la cotidianidad de la realidad política y la base de una actitud defensiva y autoconservación de los partidos de izquierda: partidos pensando y hablando en nombre de la clase obrera y actuando fuera de su ámbito.

En el contexto de este sustitucionismo de clase y de este vanguardismo sin clase, se da la crisis política de la nación y su primera respuesta en la reforma política. El dilema para toda la izquierda, y en particular la socialista y comunista, en su necesario reencuentro con el proletariado, su vinculación orgánica y su conversación en una real dirección política de masas.

Este proceso, a partir de ahora, reviste múltiples bifurcaciones y no pocas confluencias. El dilema radica en pensar lo que para México debe ser la modalidad concreta de la alianza de clases necesaria para el cambio social; lo que constituirá un nuevo sujeto revolucionario cuya alma y acción deberá ser la clase obrera.

De ahí que la lucha por la democracia en nuestro país no sea otra cosa que el cerco del Estado burgués por parte de una amplia alianza de clases sociales a través de su expresión más elevada en un ejército político de nuevo tipo. Sitiar al Estado desde afuera, organizando lo no organizado, y rescatando paulatinamente de su control los sectores asalariados, es también desmontarlo desde su interior, aprovechando y desarrollando sus potenciales contradicciones.

Este proceso nos obliga en el presente a ser conscientes de que el tiempo de la revolución socialista en México atraviesa una prolongada guerra política de avances y retrocesos; significa que no hay que perder nunca de vista el golpismo latente de todo Estado burgués; significa la alerta permanente de que el proceso es único y diferenciado y su contenido socialista. Significa también el despliegue permanente de la lucha contra los cantos de sirena del reformismo, peligro fundamental en toda guerra política que persigue el socialismo pero que no se mueve en sus inicios en la perspectiva inmediata de la revolución.

En realidad la crisis del sistema tiende a concluir un ciclo histórico de una forma del quehacer político de una forma de pensar la revolución y de una forma de ser de los partidos y de una forma de

operar los sindicatos y, por último, de una forma de comportarse el campo de la superestructura. No importa que la inercia de las instituciones y la cosificación de las ideologías nos obliguen por ahora a mirar un presente en transformación con los cansados ojos del pasado.

Con todo ello queremos decir que la revolución socialista en nuestro país se ha retirado en el tiempo –ésta es una de las determinaciones de la nueva fase del capitalismo-: sin embargo, la contradicción principal del sistema tiende a ser más nítida, con menos mediaciones, y más decisiva en el desarrollo de la lucha.